

Legajo de apelación en causa CPE 1008/2008: “ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS FORMADAS EN CAUSA ‘AGROSTRADA S.R.L.; LLANOS JUHIO S.R.L.; SAVERSSA CEREALES S.R.L. Y OTROS S/INF. LEY 24.769’”, Causa N° CPE 1008/2008/13/CA6, Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, Sec. N° 19, Sala “B”, orden N° 29.320.

///nos Aires, de julio de 2.020.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal ante la instancia anterior obrante en copia a fs. 149/152 del presente incidente contra la resolución obrante en copia a fs. 137/148 del presente, por la cual se dispuso el auto de sobreseimiento de J. R. G., de P. M. S., de C. E. S., de R. E. S. y de C. E. S.

La presentación de fs. 171 de este legajo, por la cual el señor fiscal general de cámara mantuvo el recurso de apelación aludido por el párrafo anterior.

Los memoriales presentados a fs. 185/186 vta. y 187/196 del presente, por los cuales el señor fiscal general de cámara y la defensa de C. E. S. informaron en la oportunidad prevista por el art. 454 del C.P.P.N.

Y CONSIDERANDO:

1º) Que, por la resolución recurrida, el señor juez a cargo del juzgado “*a quo*” dictó un auto de sobreseimiento respecto de J. R. G., de P. M. S., de C. E. S., de R. E. S. y de C. E. S. con relación al hecho que se describió como “...*las supuestas evasiones de pago del Impuesto a los Débitos y Créditos en Cuentas Corrientes Bancarias, correspondiente al ejercicio anual 2007, por la suma de \$ 908.744,30 al que se habría encontrado obligada la contribuyente AGROSTRADA S.R.L.*” (consid. 1º de la resolución recurrida).

Para adoptar la resolución recurrida el juzgado “*a quo*” consideró que el hecho mencionado por el párrafo anterior no encuadra en una figura legal a partir de la derogación del régimen penal tributario establecido por la ley N° 24.769 vigente al momento de la comisión presunta de aquel hecho y la sustitución de aquel régimen por el contemplado por el art. 279 de la ley N° 27.430 (Boletín Oficial de fecha 29/12/2017, vigente desde el 30/12/2017), que estimó aplicable al caso en función del principio de la aplicación de la ley penal más benigna.

2º) Que, por el recurso de apelación interpuesto el representante del Ministerio Público Fiscal se agravio pues “...al momento de impulsar la acción penal de las presentes actuaciones esta Representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación consideró a la utilización fraudulenta del beneficio fiscal de reducción de la alícuota para evadir el Impuesto a los Débitos y Créditos en Cuentas Corrientes Bancarias, correspondiente al ejercicio fiscal 2007, como un único hecho, materializado a través de las firmas LLANOS JUHIO S.R.L. y AGROSTRADA S.R.L.; hecho que fue atribuido a un grupo de personas físicas que habrían llevado adelante la operatoria espuria investigada, el cual generó un perjuicio fiscal total de \$ 3.698.937,25...”, que “...a través del resolutive atacado VS desdobló la imputación correspondiente a la evasión relativa al ejercicio comercial 2007, como si se hubiera tratado de dos hechos independientes, de forma discordante con la unidad delictiva desplegada por los aquí imputados...”, “...se advierte que la banda que llevaba adelante la operatoria... utilizaba indistintamente las cuentas bancarias abiertas respecto de una u otra empresa, para cumplir con su cometido; es decir, se trataba de una actividad única, desplegada por unas pocas personas físicas, en un único domicilio, con una finalidad defraudatoria singular, accionar que -reiterando que se trataba de empresas ficticias o ‘pantalla’- deja evidenciado, a todas luces, que constituye una reiteración de actos que conforman un único hecho...” y que, en consecuencia, “...el desdoblamiento de la imputación de la evasión correspondiente al ejercicio fiscal 2007, que llevó a VS, partiendo del monto parcial y cercenado del hecho, a analizar la correspondencia de la aplicación de una ley penal más benigna, no puede sostenerse...”.

3º) Que, cabe destacar que, en una oportunidad anterior, con fecha 17/4/2018, el señor juez “a quo” ya había dispuesto el sobreseimiento de J. R. G., de P. M. S., de C. E. S., de R. E. S. y de C. E. S. con relación al hecho descripto por el considerando 1º de la presente con sustento en la aplicación retroactiva del Régimen Penal Tributario incorporado por el art. 279 de la ley 27.430 (fs. 105/131 de este incidente).

Por un pronunciamiento anterior de este Tribunal, recaído como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal contra la resolución aludida por el párrafo que antecede, esta Sala “B” revocó los sobreseimientos dispuestos respecto de los nombrados por estimar que:

“...si bien no fue lo que hizo al momento de interponer los recursos

de apelación de fs. 2179/2183, 2992/2997 y 3013/3017 vta. del legajo principal

Fecha de firma: 04/08/2020
Alta en sistema: 04/08/2020

Firmado por: VERONICA MARIA DANKERT, SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO ENRIQUE HORNOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN CARLOS BONZON, JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE



contra los temperamentos que el juzgado ‘a quo’ adoptó en su momento en los términos del art. 309 del C.P.P.N., por la impugnación ahora en examen el representante del Ministerio Público Fiscal se agravió por el alcance que el juzgado ‘a quo’ atribuyó a los sucesos presuntos de evasión tributaria relacionados con el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias y Otras Operaciones correspondiente al ejercicio anual 2007 (confr. fs. 118/121 de este incidente).

13º) Que, en el sentido indicado por el considerando anterior, por el recurso de apelación interpuesto a fs. 3539/3542 de los autos principales la fiscalía interviniente retomó una hipótesis de investigación o interpretación de los hechos que había exteriorizado por los dictámenes fiscales que lucen a fs. 1759/1770 vta. y 1842/1842 vta. del mismo legajo, pero que el juzgado ‘a quo’ desestimó provisionalmente al tiempo de disponer la citación de los imputados a prestar la declaración indagatoria (confr. fs. 1843/1844, también de la causa principal) y en la que el Ministerio Público Fiscal no volvió a insistir a pesar de toda la actividad procesal desarrollada en el ínterin.

En el contexto aludido, por el recurso de apelación que luce en copia a fs. 118/121 de este incidente, se manifestó: “...al momento de requerir el impulso de la acción de las presentes actuaciones en relación a ciertas personas, esta Representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación (ver dictamen de fs. 1759/1770 vta.) consideró a la utilización fraudulenta del beneficio fiscal de reducción de la alícuota correspondiente al ejercicio fiscal 2007, como un único hecho materializado a través de las firmas LLANOS JUHIO S.R.L. y AGROSTRADA S.R.L., accionar que habría sido desarrollado por el grupo de personas que llevarían adelante la operatoria espuria investigada, el cual generó un perjuicio fiscal total de \$ 3.698.937,25 [...] Sin perjuicio de ello, V.S. en el considerando 1. de la resolución aquí atacada desdobló la imputación correspondiente al ejercicio comercial 2007 como si fueran dos hechos independientes, describiéndolos como hechos c) y d), de forma discordante con la unidad delictiva desplegada por los aquí imputados que fuera detallada por esta parte en el dictamen obrante a fs. 1759/1770 vta. [...] Los hechos delictivos investigados en autos requieren del acuerdo de voluntades de los encartados, quienes habrían sumado sus aportes en una actuación única y común, cuya finalidad no fue otra que la de la concreción de la defraudación al Fisco a través de la utilización de los entes societarios fictos creados al efecto, a través de los cuales se obtuvo la alícuota reducida en cuestión [...] En tal sentido, la participación de algunos de los encartados en uno u otro ente con la finalidad de actuar como interpósitas personas para



ocultar la identidad de los verdaderos obligados, tratándose de una actividad delictiva única, debe entenderse como aporte necesario al injusto imputado en su conjunto. Es decir, la situación fáctica de participar en aquella ocultación en relación a AGROSTRADA S.R.L. y/o a LLANOS JUHIO S.R.L., constituye el elemento incriminador respecto de cada partícipe en el hecho único de evasión tributaria agravada del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (ley 25.413) correspondiente al ejercicio fiscal 2007, el que incluye las maniobras relacionadas con ambas sociedades...' (se prescinde del resaltado del original).

14º) Que, sin perjuicio de lo que pudiese opinarse en torno al proceder del Ministerio Público Fiscal reseñado por el primero de los párrafos del considerando que antecede, habida cuenta los agravios que se invocaron finalmente por el recurso de apelación al cual viene haciéndose alusión y que el juzgado 'a quo', al momento de disponer las citaciones en los términos del art. 294 del C.P.P.N., desestimó la pretensión original de la fiscalía interviniente '...en función de la prueba colectada hasta [aqu]el momento...' y '...[s]in perjuicio de lo que eventualmente pudiere corresponder en el futuro, según los resultados de la investigación...' (confr. fs. 1843/1844 del legajo principal y la nota al pie N° 2 de aquella providencia), corresponde concluir que, en las circunstancias actuales de la causa, no puede considerarse alcanzado, respecto de los sucesos de los que se trata, el estado de certeza requerido para el dictado de una decisión en los términos previstos por los arts. 335 y 336 del C.P.P.N.

Esto es así, máxime cuando por la resolución recurrida **no se establecieron las razones que permitirían descartar definitivamente la postura propuesta en su momento por el Ministerio Público Fiscal y se advierte que, con relación al fin presuntamente ilícito que habría guiado la constitución y/o la utilización de las personas jurídicas involucradas, por el mismo pronunciamiento se expresaron consideraciones que podrían llegar a estimarse como conciliables o en línea con las invocadas por la fiscalía interviniente** (confr., por ejemplo, los considerandos 33º y 34º de la resolución dictada a fs. 3477/3504 del legajo principal)" (confr. CPE 1008/2008/9/CA5, res. del 21/11/2018, Reg. Interno N° 1006/2018; el resaltado corresponde a la presente).

4º) Que, no obstante el modo en que se pronunció este Tribunal por la resolución aludida por el considerando que antecede, el juzgado de la instancia anterior, adoptó la resolución referida por el considerando 1º de la presente sin expresar las razones que permitirían descartar definitivamente la postura propuesta en su momento por el Ministerio Público Fiscal.

5º) Que, por el art. 123 del C.P.P.N. se prescribe, bajo pena de nulidad, la obligación del juez de motivar las sentencias y los autos.

La motivación es la enunciación de la premisa del silogismo que concluye en los puntos resolutivos, es decir, el itinerario lógico que el juez ha recorrido para llegar a la conclusión. En consecuencia, si la conclusión es equivocada, se puede fácilmente determinar, por medio de la motivación, en qué etapa del camino el juez perdió la orientación (confr. C.N.C.P., Sala III, causa N° 1393, “*PESADO, Alejandro s/rec. de casación*”, rta. 25.03.98, Reg. N° 107/98), permitiéndose así al eventual recurrente fundar los agravios y a los tribunales de grado superior ejercer el debido control de la actividad jurisdiccional (confr. C.N.C.P., Sala III, causa N° 18, “*VITALE, Rubén D. s/rec. de casación*”, rta. 18.10.93, Reg. N° 49/93; y Regs. Nos. 996/99, 1050/00 y 769/01, entre otros, de esta Sala “B”).

6º) Que, los defectos de fundamentación constituyen una causal de arbitrariedad según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y resienten la motivación lógica del fallo. Conforme a aquella doctrina, la exigencia de que los fallos judiciales tengan una fundamentación suficiente y objetiva deriva concretamente de dos principios de naturaleza constitucional: el de la garantía de la defensa en juicio y el de la forma republicana de gobierno (confr. Fallos 116:23; 119:284; 189:34, entre otros; y Regs. Nos. 1008/01 y 883/07 de esta Sala “B”).

7º) Que, por la lectura del pronunciamiento apelado se advierte que el señor juez a cargo del juzgado “*a quo*” estimó que, toda vez que por el auto de fs. 1843/1844 del legajo principal (obrante en copia a fs. 15/16 vta. del presente), por el cual se dispuso la convocatoria a prestar las respectivas declaraciones indagatorias de J. R. G., de P. M. S., de C. E. S., de R. E. S. y de C. E. S. y por las actas labradas en oportunidad de recibirse las declaraciones respectivas a los nombrados, se describió el hecho imputado a aquéllos del modo adoptado por considerando 1º de la presente, “...sin perjuicio de la opinión personal que pudiera tenerse en punto a las circunstancias que justificaron la adopción de aquel criterio... **media estabilidad procesal en punto a aquella cuestión, por lo que deberá estarse a lo allí establecido...**” (el resaltado corresponde a la presente), cuando este Tribunal, por el pronunciamiento recordado por el considerando 3º de la presente, valoró expresamente el auto de fs. 1843/1844 de los autos principales y el alcance dado



a los hechos imputados como consecuencia de aquél y, aun así, estimó que correspondía que el juzgado de la instancia anterior estableciera las razones, de existir, que permitirían descartar definitivamente la postura propuesta, en su momento, por el Ministerio Público Fiscal.

Por la resolución recurrida se afirmó también que “...hasta la actualidad no se han incorporado elementos que permitan modificar el temperamento que fuera expuesto a fs. 1843/1844...”, sin explicitar cuáles serían aquellos ‘elementos’ a los cuales alude, “...y, por otro lado, tampoco se advierte -en función de la extensa investigación llevada a cabo y el tiempo transcurrido desde aquel-, la posible incorporación de nuevos elementos probatorios que ameriten su modificación”, omitiendo por completo una valoración por la cual se puedan conocer las razones en las cuales se habría sustentado aquella afirmación.

Por el resolutorio recurrido se hizo también alusión a un pronunciamiento anterior de este Tribunal por el cual se había revocado un auto de procesamiento dictado respecto de J. R. G. con sustento en el dictado de la ley N° 27.430 con relación, entre otros, al hecho descripto por el considerando 1° de la presente, oportunidad en la cual esta Sala “B” hizo expresa alusión a que aquella revocatoria se efectuaba “...de acuerdo con el alcance que el juzgado ‘a quo’ dio a aquéllos [hechos]...” (consid. 14° de la resolución recurrida).

8°) Que, por lo expresado por el considerando que antecede se advierte que por la resolución recurrida se habría cumplido sólo en forma aparente con el requisito de la motivación de las decisiones judiciales a los fines de permitir el control que se mencionó por el considerando 5° de la presente.

En efecto, por la resolución apelada se prescindió totalmente de analizar las circunstancias fácticas en que el representante del Ministerio Público Fiscal sustentó lo requerido, vinculadas con que las personas que llevaban adelante la operatoria que concluyó en la evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos en Cuentas Corrientes Bancarias correspondiente al ejercicio fiscal 2007 habrían utilizado indistintamente las cuentas bancarias abiertas respecto de AGROSTRADA S.R.L. y de LLANOS JUHIO S.R.L. y con que se habría tratado de una actividad única, desplegada por unas pocas personas físicas, en un único domicilio, con una finalidad defraudatoria singular, mediante la utilización de empresas ficticias o “pantalla” y de los elementos de prueba señalados por aquella parte, mediante la remisión al escrito obrante en copia a fs. 1/13 del presente -entre otras presentaciones-, como soporte del pedido para que se trate la presunta evasión de pago del impuesto aludido correspondiente al

ejercicio anual 2007 como un hecho único, cuyo monto, en consecuencia, superaría la condición objetiva de punibilidad prevista por el art. 1 del Régimen Penal Tributario aprobado por el Título IX de la ley 27.430.

En este sentido, **sin entrar al análisis del fondo de la cuestión**, se advierte que por aquella resolución se habrían omitido ponderar las razones invocadas por el fiscal de la instancia anterior, cuya importancia fue resaltada por el pronunciamiento de esta Sala “B” recordado por el considerando 3º de la presente, para sostener que el hecho atribuido a J. R. G., a P. M. S., a C. E. S., a R. E. S. y a C. E. S. es la utilización fraudulenta del beneficio fiscal de reducción de la alícuota para evadir el Impuesto a los Débitos y Créditos en Cuentas Corrientes Bancarias, correspondiente al ejercicio fiscal 2007, como un único hecho, materializado a través de las firmas LLANOS JUHIO S.R.L. y AGROSTRADA S.R.L., el cual habría generado un perjuicio fiscal total de \$ 3.698.937,25.

9º) Que, las circunstancias expresadas por los considerandos anteriores constituyen un vicio en la fundamentación del auto recurrido, pues la obligación de enunciar y de meritar, de modo expreso, las pruebas por las cuales, específicamente, se adopta cada conclusión, debe entenderse implícitamente abarcada por la exigencia de motivación que se establece por los arts. 123 y 336 del C.P.P.N., independientemente del carácter somero con el cual puede exteriorizarse aquella explicación.

Por otra parte, la omisión del juzgado “a quo” de ponderar las razones invocadas por el representante del Ministerio Público Fiscal resiente la motivación de la resolución apelada, cuya fundamentación, en tal caso, resulta sólo aparente y equiparable, según numerosas decisiones del más alto Tribunal, a la falta de fundamentación que, además, constituye una causal definida de arbitrariedad (confr. Genaro CARRIÓ y Alejandro CARRIÓ, “*El recurso extraordinario por sentencia arbitraria*”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1.983, T. I., pág. 229 y ss.).

10º) Que, por consiguiente, corresponde declarar la nulidad de la resolución obrante en copia a fs. 137/148 del presente, en cuanto fue motivo de análisis por la presente, de conformidad con lo que se dispone por los arts. 123, 166, 168 segundo párrafo del C.P.P.N. sin disponer el apartamiento del señor juez firmante en razón de que el mismo no se encuentra actualmente a cargo del juzgado “a quo”.



Por ello, **SE RESUELVE:**

I. DECLARAR LA NULIDAD de la resolución obrante en copia a fs. 137/148 del presente.

II. SIN COSTAS (arts. 530, 532 y ccs. del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese de conformidad con lo dispuesto por la resolución N° 96/2013 de superintendencia de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y devuélvase.

La Dra. Carolina L. I. ROBIGLIO no firma la presente por haberse aceptado la inhibición formulada por la señora juez de cámara mencionada para intervenir en este legajo (confr. fs. 161 de este incidente y el art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

